

IDEAS

En los Centros de Estudio (*think tanks*)

Mercado de capitales: Una agenda post MKII

Las finanzas están de moda. Así lo demuestran dos importantes iniciativas en el ámbito de las políticas públicas que se materializarán este año: la discusión de la reforma del sistema de AFP y el proyecto de ley MKII que por estos días se discute en el Congreso. Ambas tendrán un importante impacto en nuestro mercado de capitales.

A partir de ellas se abre la oportunidad de preguntarse si necesitamos otras correcciones que ayuden a incrementar la productividad y, finalmente, aporten al crecimiento.

Una posible agenda de reflexión debiera considerar al menos tres ejes.

El primero de ellos, cómo aumentar la intensidad de la competencia y desencadenar la innovación del sector. Cierta evidencia indica que la industria financiera muestra un alto grado

de concentración, importantes barreras a la entrada (algunas regulatorias) y se mantiene fuera del circuito de los TLC, mientras que en materia de transparencia de información y autorregulación se puede avanzar más. La reflexión debiera

abordar cómo incrementar la intensidad de la competencia en segmentos con altos costos de monitoreo y asimetrías de información como las pymes, qué rol

juega la actual tasa máxima convencional y cómo se resuelve el dilema de la regulación prudencial y los temas de lavado de dinero con una mayor internacionalización de los servicios financieros. También habría que examinar qué barreras frenan la innovación.

Un segundo eje se basa en discutir cuál es el diseño institucional de supervisión más apropiado para los próximos años. Cabe preguntarse

si es necesario fortalecer aún más la coordinación entre superintendencias, ver cuál es su nivel de independencia del ciclo político y cómo se avanza en temas de transparencia, además de revisar una mayor protección al consumidor. En particular, resulta interesante analizar la conveniencia de separar el rol normativo del de supervisión, evitando así que las instituciones reguladoras sean juez y parte.

Un tercer eje, finalmente, se encuentra en las políticas financieras asociadas a las actividades de desarrollo. Aquí parece interesante estudiar la ampliación de los fondos de garantías tipo Fogape, acentuar el rol de Corfo como banca de segundo piso y promover soluciones innovadoras de financiamiento y transferencia de riesgos en el mercado de capitales.

Se trata de una nutrida agenda de temas que estarán vigentes y que no sólo son parte de una moda.



José Miguel Cruz
Consejo Ampliado
de Expansiva
Ingeniería
Industrial
U. de Chile
Socio de CL Group

“La industria financiera muestra un alto grado de concentración”.

Participación chilena en Haití

Como es bien sabido, Chile participa desde 2004 con un contingente militar en Haití. La decisión de enviar tropas chilenas a la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en la isla (Minustah) fue adoptada por el ex Presidente Lagos y sometida, de conformidad a la normativa vigente, a la ratificación del Senado el 18 de mayo de ese año. En dicha oportunidad se obtuvo el acuerdo de la Corporación para el envío de tropas hasta el 1 de junio de 2005; desde ese momento se ha renovado la autorización por lapsos adicionales de seis meses.

Evidentemente, una decisión de este tipo debiese implicar una cuidadosa evaluación de los beneficios y costos involucrados. Los beneficios que se atribuyen a la participación de Chile en Haití son de dos tipos principales: de orden político internacional y de orden militar. En la primera categoría, estaría el ser parte del club de países que cumplen con los deberes que trae la integración; en la segunda, las lecciones que las

Fuerzas Armadas obtendrían de una operación compleja, con riesgo real, y a mucha distancia de sus bases de operación. Sin duda en ambos espacios existen beneficios; el problema es que cuando se analizan los informes que hacen al Senado los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa para justificar esta misión, resulta nítido que la evaluación es, a lo menos, superficial. En cualquier caso, los beneficios deben ser puestos contra los costos para poder afirmar que una acción es válida o no.

En este ámbito, nuevamente, el análisis efectuado es decepcionante. El costo neto ha sido calculado simplemente como la diferencia entre ingresos y gastos (y que alcanza así, hasta ahora, a unos US\$ 8 millones); el problema es que el costo relevante son todos los costos evitables, no

sólo los dineros directamente gastados.

En síntesis, la decisión respecto de permanecer o no en Haití y la forma de hacerlo se está tomando hoy con un nivel de precariedad analítica que es grave. Estimamos, por lo tanto, que la continuidad y el formato de participación en

“La decisión respecto de permanecer o no y la forma de hacerlo se está tomando hoy con un nivel de precariedad analítica grave”.

Haití requiere: (i) medición costo/efectividad de lo realizado a la fecha; (ii) establecimiento de un conjunto de metas precisas a lograr en el período adicional que se solicita (contratos de desempeño), y (iii) proyección di-

námica de la forma que irá asumiendo la participación a medida que la situación en Haití evolucione en el mediano y largo plazo. Esencialmente, lo que se necesita es transparencia y evaluación de desempeño. Ambas están hoy en déficit en la acción del Ministerio de Defensa.



Guillermo Pattillo
Director



Tomás Duval
Secretario

Comisión de Defensa,
Instituto Libertad

La Alianza en la encrucijada

Puede llegar a ser muy contraproducente que sectores de la derecha política y del empresariado se enfilen por el camino de una oposición dura y obstruccionista, sin importar los costos que deba pagar el país. La experiencia postdictadura se ha caracterizado por la capacidad de los dirigentes de sostener un diálogo fluido y poner los intereses del país por delante de protagonismos o ambiciones personales o partidistas. De aquí nace el “modelo chileno”: la construcción

de un proyecto país que implica una democracia cada vez más sólida y una economía vigorosa e incluyente, inserta en la globalización.

Gobiernos animados por una ética del bien común han buscado convertir el modelo neoliberal autoritario de la dictadura en uno de carác-

ter inclusivo y democrático, en el que políticas públicas eficientes permiten la progresiva incorporación de las mayorías a los beneficios del mercado y la sociedad, y políticas económicas responsables y creativas expanden las posibilidades del sector privado. Esta experiencia es un activo muy sólido, y debe permitir enfrentar las áreas más rezagadas o “talones de Aquiles”, como la inequitativa distribución del ingreso, los déficits en la modernización y transparencia del Estado y la

calidad de la política. De hecho, el gobierno ha agregado en las últimas semanas a su notable programa de protección social una ambiciosa agenda de transparencia, complementando el acuerdo Insulza-Longueira de 2003.

La apuesta por invalidar la exitosa experien-

cia chilena buscando cuestionarla a partir de maximizar los efectos de los casos de corrupción es muy riesgosa para Chile y la propia Alianza. Todos los estudios de opinión coinciden en mostrar que la ciudadanía espera que tanto el gobierno como la oposición colaboren más activamente. Defraudar estas expectativas le puede costar caro a la clase política.

Se equivocan radicalmente los sectores de derecha que atribuyen su fracaso electoral al acuerdo Insulza-Longueira. Olvidan sus propias divisiones y que la Concertación tuvo la capacidad de mantener su unidad y renovar liderazgos, aprovechando su gran activo: tres gobiernos exitosos que han cambiado Chile.

Si la Alianza quiere ser gobierno debe ofrecer alternativas democráticas más ambiciosas de las que ha encarnado la Concertación, no buscar deslegitimar una experiencia de la que ha sido parte fundamental.



Ricardo Brodsky
Secretario Ejecutivo
Proyectamérica